

El 19, porque sin motivo legal, se le encerró, incomunicándolo en un incómodo calabozo de la cárcel pública.

El 20, en su fracción 4ª, porque no se le facilitaron los datos necesarios para su defensa, y en la fracción 5ª, porque no se le permitió defenderse.

El 14, porque al juzgarlo, no se le aplicaron exactamente las leyes relativas al hecho, materia del juicio, y

Considerando por último: que en el mismo Código de 57, se establece que él será la ley suprema de toda la Unión; que los Jueces de cada Estado, se arreglarán á los preceptos que el contiene, y por lo tanto, sin excepcion de clases ni categorías, nadie está dispensado de observar sus disposiciones.

Se declara: Que la Justicia Federal ampara al C. Lucas Valdés, contra la violación de garantías de que ántes se hizo mérito. Notifíquese; publíquese; sáquese testimonio del «otro sí» del alegato del C. Promotor, en donde pide que se le imponga al C. Castillo Montero, la multa que corresponde, porque no formuló su acusación en papel sellado, para seguir el incidente por cuerda separada; prevéngase al quejoso que reponga el invertido en el juicio, y eleve en revisión.

Así definitivamente, juzgando y sentenciando, lo decretó el C. Juez de Distrito y lo firmó ante mí. Doy fé.—*Manuel Mendiola.*—*Felipe Garza y Garza*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 9 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, (Estado de Tamaulipas,) por el C. Lucas Valdés, quejándose de los procedimientos de los CC. Juez de 1ª instancia del Distrito del Norte del Estado y Alcalde 4º de la Ciudad de Matamoros, con los cuales reputa violadas en su persona, las garantías consignadas en los arts. 14, 16, 17, 19 y frac. 4ª

y 5ª del 20; visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito, se declara: que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes y por sus propios legales fundamentos, la sentencia del C. Juez de Distrito, que declara, que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Lucas Valdés.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron —*José Mª Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Savala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, Secretario.

Es copia que certifico, México, Abril 28 de 1875.—*Enrique Landa*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato por los reos José Mª Méndez y Pedro Díaz, contra las Sentencias pronunciadas por el C. Jefe Político de Leon que los condenó á muerte por el delito de robo con usalto.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Los reos José María Méndez y Pedro Díaz, solicitaron el amparo de la Justicia de la Unión contra el Jefe Político de Leon, suponiendo violadas en su persona las garantías individuales

consignadas en los arts. 20 fracs. 3º, 4º y 5º, y 23 de la Constitución Federal, por haber sido juzgados como reos del delito de robo con asalto, y condenados á la pena de muerte.

El Jefe Político de Leon, al rendir el informe de que habla el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, manifestó al Juzgado, que los quejosos fueron juzgados con arreglo á la ley de 23 de Mayo de 1872, que suspendió para los salteadores y plagarios las garantías individuales que se invocaban en el escrito de queja, y acompañó á su informe una copia de la sentencia pronunciada en el acta criminal que les habia instruido.

En el término probatorio á petición de los quejosos, se recibieron informaciones de testigos que depusieron abonando su conducta. Estas pruebas eran insuficientes para resolver si debía concederse el amparo solicitado; y con objeto de esclarecer los hechos referidos en el escrito de queja, el que suscribe, durante el término para alegar, suplicó al Juzgado, que, con la calidad de para mejor proveer, recabara copia de la acta criminal que la autoridad política de Leon instruyó á los quejosos. El Juzgado accedió á esta solicitud, y una vez recibida y agregada dicha copia, mandó que el que suscribe presentara su alegato dentro del término de tres dias.

Examinando la causa que se formó contra José María Mendez y Pedro Diaz, que empezó á instruirse por el Juez 1º de letras de Leon, el que juzgándose incompetente por tratarse de un robo con asalto, remitió las diligencias que habia practicado al Jefe Político del mismo departamento, para que las continuase.

El hecho que motivó el proceso, fué haber parecido sospechosos los quejosos á un agente de policía en Leon; pero en la averiguación resultó, que en su poder se encontraron once mulas, un caballo, una canana en la que estaban boletas de pago de la contribución de guardia nacional pertenecientes á Juan

García y Plutarco Esquivél, los cuales fueron asaltados el 18 de Julio de 1872 por tres bandidos en un punto que se llama "Ojo Zarco" cerca de San José de la Isla, jurisdicción del Estado de Zacatecas.

La responsabilidad de los procesados se fundó principalmente en el hallazgo en su poder de los objetos robados, sin que justificaran la adquisición legal de dichos objetos. Esta prueba legalmente no es bastante para declarar á un hombre salteador; pero este punto es de la exclusiva competencia de la autoridad encargada por la ley de esta clase de delitos.

Aparece por consecuencia en la causa, un delito de los que habla la ley de 23 de Mayo de 1872, que suspendió para los salteadores y plagarios las garantías individuales que han invocado los quejosos; y siendo, como antes se ha dicho, de la competencia de la autoridad política que los juzgó, estimar las pruebas de culpabilidad, no hay motivo para conceder el amparo que se solicita en este juicio, y así pide el Promotor fiscal, se sirva el Juzgado decretarlo.

Guanajuato, Noviembre 14 de 1874.—
José Aguilar y Córdova.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 30 de Noviembre de 1874.
—Visto el presente juicio de amparo promovido por José María Mendez y Pedro Diaz, contra la sentencia de muerte que pronunció contra ellos el C. Jefe Político de Leon, violando en concepto de los quejosos, las garantías que otorgan las fracs. 3º, 4º y 5º del art. 20 y el art. 23 de la Constitución Federal; resultando: que los promoventes fueron procesados conforme á la ley de 23 de Mayo de 1872, por el asalto y robo que sufrió el C. Juan García en 18 de Junio del mismo año, en el punto llamado "Ojo Zarco" del Estado de Zacatecas; resultando: que el delito aparece justificado en el acta criminal que se instruyó á los peticionarios.

Considerando: que la autoridad política de Leon, al juzgarlos y condenarlos á la pena capital, ha procedido en ejercicio de las facultades que le concede el art. 2º de la ley de 18 de Mayo 1871, prorogada por la de 23 del mismo mes de 1872.

Considerando: que en virtud de estas leyes, los salteadores no gozan de las garantías que proclama el art. 20 de la Constitución.

Considerando: que la pena del último suplicio puede imponerse á los expresados delincuentes, con total arreglo al art. 23 del citado Código.

Considerando: que supuestas las disposiciones terminantes de las leyes y preceptos constitucionales citados, no se han infringido en perjuicio de los quejosos, las garantías invocadas por ellos.

Considerando: que á las autoridades políticas compete exclusivamente la facultad de graduar la fuerza probatoria de los datos procesales que en una causa de asalto y robo aparecen contra el acusado.

Considerando: que la culpabilidad de los quejosos, como salteadores, está ya legítimamente declarada por el Juez especial competente establecido por la ley.

Considerando: que para enmendar los errores de las autoridades políticas, en la apreciación de las pruebas de delincuencia de un presunto reo de asalto ó plagio, está introducido el recurso de inluito, como un procedimiento forzoso que equivale á una instancia de revision:

Considerando: que los agraviados han sido indultados por la Legislatura del Estado, y están pendientes de la pena que los aplique el Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución de la de muerte á que habían sido condenados: por estas consideraciones y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union, no ampara ni protege á José M. Mendez y Pedro Diaz, contra la sentencia que pronunció contra ellos el C. Jefe Político de Leon, en 17 de Agosto de 1872,

reputándolos como salteadores. Notifíquese este fallo á las partes, publíquese en el periódico y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*
—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 5 de Diciembre de 1874.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 9 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido por los reos José María Mendez y Pedro Diaz ante el Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, contra la sentencia pronunciada por el C. Jefe Político de Leon, condenándolos á muerte por el delito de robo con asalto; visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior, y enanto de autos consta y se tuvo presente, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada en 30 de Noviembre del año próximo pasado por el C. Juez de Distrito de Guanajuato, que negó el amparo á los quejosos.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*
—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 22 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por D. José Calvo, en representación de D. Matías Alzúa, contra un cebro que le hace la Recaudación del derecho del 5º, de Guaymas.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal dice: que D. José Calvo en representación de D. Matías Alzúa, pide amparo y protección contra los procedimientos del Recaudador del derecho del quinto, el que le exige la cantidad de cuatrocientos diez y ocho pesos setenta y siete centavos como derecho impuesto por ese mismo quinto, según el decreto de clasificación de rentas de este Estado, de 14 de Agosto del año próximo pasado. En concepto del que suscribe, no le cabe la menor duda que procede este amparo, supuesto que los Estados no tienen derecho de imponer gravámen alguno sobre exportaciones, si no es previo el consentimiento del Congreso de la Unión, art. 112, frac. 1ª de la Carta Fundamental. En consecuencia, al querérsele obligar al quejoso á ese pago por derecho de quinto de plata pasta, embarcada en el vapor «Montana» con destino á San Francisco de la Alta California, se le ha violado en su persona las garantías que le otorga la Constitución General en su art. 16; y tanto por esto, como por estar fundado su recurso en el art. 1º frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, es de accederse á lo que se solicita.

Guaymas, Octubre 15 de 1874.—*Lic. José Monterde*.

Es copia íntegra del original, que certifico.

Guaymas de Zaragoza, Noviembre 19 de 1874.—*Matías Moran*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas de Zaragoza, Noviembre 14 de 1874

Visto el juicio de amparo promovido por el C. José Calvo, como apoderado de D. Matías Alzúa, contra la Recaudación del derecho de quinto de esta ciudad que le exige el pago de dos por ciento sobre el importe de diez y siete barras de plata en pasta que introdujo á este puerto para su exportación, y contra las disposiciones del art. 1º frac. 2º, y del art. 3º del decreto núm. 41 de la Legislatura, fecha 15 de Julio del presente año, por no tener obligación el mexicano de contribuir para los gastos públicos del Estado en que reside, de una manera desproporcionada é inequitativa, según lo dispuesto en la frac. 2ª del art. 31 de la Constitución general, y por no estar autorizado el Estado de Sonora para imponer contribuciones ni derechos sobre importación ó exportación, invadiendo las facultades del Congreso de la Unión en la frac. 9ª del art. 62, y en contravención de lo prevenido en la 1ª frac. del art. 112 del mismo Código, así como por no tener el C. Recaudador del referido derecho de quinto, facultad alguna para enjuiciar, embargar ni molestar para nada al quejoso, con infracción de lo dispuesto en el art. 50 y con violación de las garantías otorgadas en los arts. 13 y 16 de la misma carta fundamental. Vista la suspensión provisional, el informe de la autoridad, el pedimento del C. Promotor Fiscal, el dictámen del C. Asesor, la citación para sentencia con cuanto mas se debía y ver convino.

Considerando: 1º Que el impuesto del 2 p^o que, conforme á la frac. 2ª del artículo 1º del expresado decreto del Estado, núm. 40, fecha 15 de Julio del presente año, que es su ley de clasificación de ren-